



Jornada de Diálogo Comunitario: Respuestas de Salud (VIH, TB), Drogas y Seguridad

Minuta de evento

Día por la Acción Global: “Apoye No Castigue”.



Antecedentes del Evento

Ecuador atraviesa una crisis estructural en seguridad y salud pública, agravada por políticas de drogas punitivas y militarizadas. Estas medidas han incrementado la violencia, el encarcelamiento masivo y la criminalización, afectando de manera desproporcionada a comunidades empobrecidas, personas privadas de libertad (PPL) y mujeres. La situación en los centros de privación de libertad (CPL) es especialmente crítica, con condiciones que favorecen la propagación de enfermedades como la tuberculosis. Ante este panorama, se convocó a un espacio de diálogo comunitario para construir memoria colectiva, análisis y propuestas desde un enfoque interseccional, feminista y de derechos humanos.

Introducción

Palabras de bienvenida por **Aylin Torres, docente de FLACSO Ecuador**. [La apertura](#) estuvo a cargo de **Ángela León Cáceres**, activista en salud pública y Coordinadora Global de Women4GlobalFund. Resaltó el fracaso de la "guerra contra las drogas" ya que ésta ha profundizado la criminalización y las vulnerabilidades interseccionales; abogó por una respuesta desde el sur global, feminista y basada en la evidencia y el cuidado.

Mesa 1: Política de Seguridad, Drogas y Personas Privadas de Libertad

Modalidad: Híbrida

Panelistas

Luis Córdova

Catedrático de la Universidad Central del Ecuador y director del Observatorio de Conflicto.

- Expuso que la guerra contra las drogas en Ecuador debe entenderse dentro de una crisis global del modelo occidental: colapso del Estado-nación, sobreendeudamiento y desmantelamiento de las democracias.
- Sostuvo que la seguridad ha desplazado a la política como el nuevo campo de disputa de poder, donde las decisiones no se toman con base en derechos, sino en control territorial y extractivismo.

- Alertó que el Estado se ha convertido en una máquina de guerra que opera en favor de las élites económicas, bajo el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana.
- Cuestionó el uso de reformas legales para proteger inversiones y militarizar los territorios ricos en recursos naturales.

Isabel Pereira

Directora de políticas de drogas en DeJusticia (Colombia).

- Denunció el impacto desproporcionado del encarcelamiento sobre mujeres, muchas de las cuales ingresan al microtráfico como estrategia de supervivencia.
- [Presentó la Ley de Servicio de Utilidad Pública](#) en Colombia como una alternativa no carcelaria en Colombia. Aunque progresiva, la ley enfrenta barreras en su implementación debido al desconocimiento judicial, estigmas y falta de voluntad política.
- Advirtió que las mujeres procesadas no solo son criminalizadas sino revictimizadas, forzadas a "reparar" daños sociales derivados de un consumo que es legal en su país.
- Llamó a transformar la justicia penal con un enfoque restaurativo, crítico y feminista que priorice la autonomía.

Andrea Aguirre y Elizabeth Pino

Andrea Aguirre es profesora universitaria e investigadora; Elizabeth Pino, activista por los derechos de las personas privadas de libertad.

- Ambas denunciaron el rol del Estado en la producción de violencia carcelaria y su complicidad con redes de crimen organizado.
- Resaltaron que las masacres carcelarias son la consecuencia de una política deliberada de abandono estatal, racismo estructural y lógicas patriarcales.
- Andrea propuso romper con el lenguaje oficial que divide a los presos entre "buenos" y "malos", pues esta categoría refuerza una justicia basada en estereotipos y castigo.
- Elizabeth destacó el papel fundamental de las mujeres familiares, quienes sostienen desde afuera los derechos mínimos de los internos, muchas veces con sus propios recursos.

Ana Morales

Defensora de DDHH, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna.

- Relató en primera persona la violencia estructural vivida por familiares de PPL. Denunció torturas, hacinamiento, falta de medicamentos y la corrupción institucional que permite el ingreso de armas y drogas a los CPL.
- Aportó datos de tuberculosis recopilados directamente por familias, que está en discordancia con la información oficial del Ministerio de Salud y el SNAI. Sugiere sobre la necesidad de contar con información actualizada y correlacionada entre actores.

- Reclamó el derecho de los familiares a organizarse, acceder a la educación y ser reconocidos como actores sociales clave.
- Insistió en que las prisiones se han convertido en espacios de muerte, con ejecuciones extrajudiciales legitimadas por la narrativa de "mano dura".

Preguntas y Respuestas Mesa 1

- **Luis Córdova:** Urgió a las ONG a disputar el discurso oficial con datos rigurosos y análisis público.
- **Andrea Aguirre:** Planteó que el Estado debe ser entendido como productor activo de las condiciones que permiten la aparición del crimen organizado y por tanto es importante mirar estas complejidades a la hora de discutir las estrategias de acción.
- Se compartió una estrategia de "parar, resistir y avanzar" como forma de acción colectiva: pensar la coyuntura, cuidarse en comunidad y avanzar con organización política.

Mesa 2: Salud Pública, Criminalización y Derechos de Personas Usuarias de Drogas

Panelistas

Fernando Bastias

Abogado y coordinador del CDH Guayaquil.

- Afirmó que la criminalización ha ganado terreno gracias al miedo social. Las personas aceptan la represión hasta que esta las afecta directamente.
- Sostuvo que el discurso oficial es funcional al poder, y que debe ser desmontado desde adentro con evidencia y acción comunitaria.
- Documentó la estigmatización de barrios como Socio Vivienda II, donde se criminaliza la pobreza mientras se ignoran los esfuerzos comunitarios por construir paz.
- Recalcó que la criminalización no sólo se ejerce con la fuerza pública, sino también con el abandono estructural.

Jahiren Noriega

Asambleísta, socóloga y activista feminista.

- Denunció que la Asamblea Nacional está utilizando el miedo social para imponer una serie de leyes autoritarias, aprobadas en tiempos inéditos y apresurados, sin las consultas debidas o la participación efectiva.
- Narró cómo se negó una visita legislativa a las cárceles tras muertes por inanición, evidenciando la deshumanización institucional.
- Explicó varias leyes recientes que atentan contra derechos como la Ley Orgánica de Integridad que permite juzgar a menores de edad como adultos con penas privativas de libertad de hasta 15 años, y la Ley de Inteligencia criminalización que permite allanamientos sin orden judicial, perdón fiscal a élites, y legalización del espionaje. Así como la ley de Solidaridad que menciona que en caso de identificar portación de sustancias sujetas a fiscalización en ningún caso se

presumirá consumo.

- Subrayó que el verdadero objetivo es garantizar el régimen de acumulación de las élites económicas.

Ángela León Cáceres

Especialista en salud global y Coordinadora Global de Women4GlobalFund.

- [Introdujo el enfoque de sindemia](#), donde enfermedades como VIH y TB están entrelazadas con factores sociales como la inequidad de género, los determinantes sociales de la salud, la pobreza, racismo, y violencia institucional.
- Mostró evidencia internacional sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y el subfinanciamiento de servicios de salud esenciales. Mientras en 23 años de creación el Fondo Global ha recibido US\$65.400 millones para inversión en respuestas de salud para VIH, TB y Malaria, la guerra contra las drogas recibe 100 mil millones anuales. Cabe indicar que actualmente, el Fondo Mundial continúa siendo el mayor financiador global en programas de reducción de riesgos y daños para personas usuarias de drogas.
- Defendió la reducción de daños como una estrategia costo-eficiente y humana: por ejemplo, los programas de intercambio de agujas «ahorran costes en comparación con los costes de por vida del tratamiento antirretroviral del VIH/SIDA», ahorran costes y tenían un rendimiento de la inversión de entre 1,3 y 5,5 dólares por cada dólar invertido.
- Llamó a descolonizar las políticas públicas e incluir a las mujeres y diversidades como protagonistas.

Camila Rodríguez

Médica, terapeuta y activista. Cofundadora de la Fundación Societat Psicodélica del Ecuador.

- [Definió la reducción de daños como una propuesta integral que pone la vida y la dignidad en el centro.](#)
- Denunció que la criminalización expulsa a las personas usuarias del sistema de salud y las empuja a entornos peligrosos.
- Presentó herramientas concretas como salas de consumo supervisado, programas de empleo, atención psicológica y análisis de sustancias.
- Reivindicó la ternura radical y la compasión como principios clínicos y políticos.

Preguntas y Respuestas Mesa 2

1. **Contradicciones legales:** La legislación sobre drogas es incoherente; se contradice a sí misma y sobrecarga un sistema judicial ya colapsado.
2. **Juventudes criminalizadas:** La falta de políticas preventivas y la falta de inversión social en educación, uso del tiempo libre, ambientes sanos y salud, convierte a niños y adolescentes en objetivos del aparato punitivo.

3. **Regulación de drogas:** Aunque el contexto actual es adverso, abrir el debate es un paso necesario, para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Ejemplos como Colombia, abren camino a experiencias regionales sustantivas.
4. **Política urgente:** Se debe invertir en salud pública y comunitaria, con énfasis en la atención de las sindemias de VIH y TB, con enfoque género-transformador y la urgencia de invertir en la producción de datos confiables y evidencia.
5. **VIH y adherencia:** Se destacó el papel de los educadores y agentes pares, el acceso a tratamientos como PrEP, y la educación desde un enfoque colectivo, sin estigma y discriminación.
6. **Anteponer la salud y la seguridad de las personas.** Garantizar el pleno acceso a los servicios de reducción de riesgos y daños, al tratamiento y a los medicamentos esenciales controlados y los cuidados paliativos, proporcionando recursos suficientes en los presupuestos nacionales y en la ayuda internacional al desarrollo.
7. **Invertir en investigación,** recolección de datos y mecanismos y modelos innovadores de reducción de daños para estimulantes y nuevas sustancias psicoactivas.
8. Las prisiones brindan una oportunidad para la detección universal y la «micro-eliminación» de enfermedades transmisibles entre una población de alto riesgo (proveyendo servicios integrales de salud mental y física, además de reducción de riesgos y daños)
9. La evidencia demuestra que la militarización del control de drogas en América Latina no ha reducido el tráfico de drogas ni modificado sustancialmente su mercado. Es necesario reforzar la necesidad de cambiar a modelos de salud pública, reducción de daños y alternativas basadas en derechos humanos, que ofrecen mayor efectividad para la seguridad, la salud y la justicia social.
10. Una política de drogas verdaderamente centrada en los derechos humanos debería proteger la autonomía humana, reducir los daños del consumo de drogas y frenar la violencia y la explotación que produce el comercio ilegal.
11. A pesar de décadas de costosas medidas antidroga, el suministro y la producción de drogas ilegales siguen floreciendo, al igual que el número de personas que consumen drogas en todo el mundo. **Mientras tanto, gran parte del mundo del sur global sigue teniendo poco o ningún acceso a medicamentos esenciales controlados, como por ejemplo los de alivio de dolor para cáncer y VIH.**
12. Mejorar la inclusión, la equidad y la no discriminación en las políticas implicando a todas las partes interesadas en la elaboración de políticas, incluidas las personas usuarias de drogas y los actores a pequeña escala que dependen de la economía de las drogas ilegales.

Conclusiones Generales del Encuentro

- En primer lugar, se reafirmó que la militarización y criminalización no han logrado reducir el narcotráfico ni mejorar la seguridad. Por el contrario, han generado un impacto devastador en

comunidades empobrecidas, personas usuarias de drogas y privadas de libertad, especialmente mujeres, adolescentes y cuerpos feminizados y racializados.

- El miedo ha sido utilizado como herramienta para justificar leyes regresivas que promueven allanamientos sin orden judicial, criminalización por presunción y encarcelamiento de menores, sin abordar las causas estructurales de la violencia ni mejorar la capacidad institucional del Estado. La seguridad y la gestión de la violencia se ha convertido en el espacio privilegiado del cálculo político.
- Los centros de privación de libertad, en particular, se han convertido en escenarios de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las masacres carcelarias, el hacinamiento extremo, la propagación de enfermedades como la tuberculosis, la falta de atención médica y el uso de la prisión como herramienta de control social fueron temas transversales. En este contexto, se subrayó el papel fundamental que juegan las familias, especialmente las mujeres, quienes no solo sostienen emocional y económicamente a sus seres queridos privados de libertad, sino que también han asumido la labor de documentar y denunciar violaciones de derechos frente a la ausencia de datos y accionar del aparato del Estado.
- En el campo de la salud pública, se destacó la urgencia de adoptar una perspectiva de sindemia, que entienda las enfermedades como el VIH y la TB no como hechos aislados, sino como parte de un entramado de desigualdades sociales, económicas y políticas. Se hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso universal a medicamentos esenciales, programas de reducción de riesgos y daños, programas integrales de prevención, detección y tratamiento así como cuidados paliativos y atención integral con enfoque de género y derechos humanos, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad como las cárceles y barrios marginados. Las problemáticas de TB y VIH, compromete la salud de las poblaciones privadas de libertad y al mismo tiempo de la salud comunitaria.
- Además, se planteó que la reducción de riesgos y daños es una política de salud pública y también una propuesta ética y política basada en el cuidado, la autonomía y la compasión. Herramientas como salas de consumo supervisado, programas de empleo sin abstinencia, educación entre pares, análisis de sustancias y acompañamiento psicosocial son iniciativas concretas que deben ser fortalecidas y ampliadas, con participación activa de las personas usuarias y las comunidades.
- Otro punto central fue la necesidad de construir políticas públicas basadas en evidencia, con inversión en investigación, recolección de datos desagregados y participación significativa de todas las partes involucradas, incluyendo a personas que usan drogas, organizaciones de base, liderazgos comunitarios y actores a pequeña escala dentro de la economía de las drogas. Sin información confiable y sin diálogo democrático, las decisiones políticas seguirán reproduciendo estigmas y fracasos.
- También se alertó sobre la creciente mercantilización de la seguridad y la salud pública, con leyes que benefician a las élites económicas bajo el disfraz de combate al crimen. La ley de privatización de áreas protegidas, por ejemplo, muestra cómo la narrativa de seguridad se utiliza para avanzar en la apropiación de territorios y recursos naturales, sin considerar los impactos sociales y ambientales.
- Finalmente, se destacó la importancia de disputar la narrativa dominante y reconstruir el sentido común desde la base. El lenguaje, los discursos y las imágenes sobre las drogas, la criminalidad y la seguridad son parte del problema, y desafiarlos es fundamental para abrir paso a alternativas más humanas, basadas en evidencia, eficaces, género-transformadoras y sostenibles. Parar, resistir y avanzar no es solo una consigna: es una hoja de ruta que articula el análisis crítico, la acción colectiva y la esperanza política.

- ***En suma, el evento concluyó con un llamado claro y contundente: es urgente abandonar el paradigma punitivo y transitar hacia políticas sociales y de salud centradas en la vida, los derechos humanos, la justicia social y el enfoque género-transformador.*** Esto requiere voluntad política, articulación comunitaria, alianzas regionales y una apuesta radical por la dignidad, cuidado y autonomía de las personas.